

Ve en www.izquierdanacional.org: YPF debe ser el principio de la nacionalización de la industria petrolera ★ Malvinas: colonialismo y energía en el Atlántico Sur, por Gustavo Lahoud ★ "Razón y Revolución" junto a los kelpers y contra Argentina, por Gustavo Cangiano ★ Malvinas: la recuperación permanente, por Hugo Rivas ★ Izquierdismo, derrotismo y colonización imperialista, por Osvaldo Calello ★ Malvinas, el presente como historia y los fantasmas de la historiografía liberal, por Fernando Cangiano ★ El discurso ecologista oculta la trama del saqueo imperialista, por Guillermo Hamlin ★ Reescribiendo a Gramsci: las apropiaciones apócrifas del progresismo, por Juan Manuel Lucas ★ La izquierda nacional y la Iglesia Católica, por Gustavo Cangiano ★ El relato derecho humanista escamotea el significado de la guerra de Malvinas, por Osvaldo Calello.

SL SOCIALISMO LATINOAMERICANO

núm. 25 - año 3 - mayo de 2012 - segunda época - \$1,00

IZQUIERDA NACIONAL ~ ARGENTINA

EL PETRÓLEO, 100% EN MANOS DEL ESTADO Y LOS TRABAJADORES

El gobierno puso fin a nueve años de sociedad política con la multinacional Repsol y modificó abruptamente un cuadro político que le abría preguntas inquietantes luego de la aplastante victoria electoral de octubre pasado. El kirchnerismo había comenzado a perder la iniciativa política tras la tragedia ferroviaria de la estación Once, cuando se hizo materia de conocimiento general la relación de convivencia existente entre los funcionarios de la Secretaría de Transporte y del Ministerio de Planificación con el Grupo Cirigliano, responsable de la destrucción criminal en que ha caído la ex línea del Sarmiento. La perdió definitivamente durante algunas semanas a manos de los medios opositores, al tomar estado público las andanzas del vicepresidente, designado para el cargo por su insignificancia política, pero en definitiva con una humana preocupación por asegurar su futuro patrimonial. El vuelco de la situación que significó la crisis con Repsol desplazó todo esto a un segundo plano.

Lo cierto es que la expropiación del paquete accionario del grupo dominante en YPF se había convertido en una medida obligada, vista la política de descapitalización seguida por el señor Brufau y sus secuaces. La crisis presentaba aspectos inconfundibles. El directorio de Repsol-YPF no sólo no realizaba inversiones, sino que giraba al exterior una masa de dividendos que superaba el volumen de ganancias obtenidas, financiando de este modo la radicación de capital en mercados que consideraban más prometedoros a costa de la petrolera local. El resultado de la maniobra fue una marcada caída de la producción y una no menos acusada reducción del horizonte de reservas, el fin del autoabastecimiento y una cuenta de 10.000 millones de dólares en

La iniciativa del gobierno es parcial y lo seguirá siendo mientras siga intacto el régimen jurídico que en los años noventa abrió el camino a la privatización de YPF y a la desregulación del sector



materia de importación de combustibles durante 2011, que amenaza con aumentar aún más durante el corriente año.

El kirchnerismo pretendió elevar el acontecimiento a una dimensión épica. Sin embargo, más allá de la retórica del discurso, a nadie puede escapársele la complicidad de los funcionarios del gobierno, comenzando por el ministro De Vido, respecto a las maniobras seguidas por Repsol. En definitiva, todo lo que los directivos de la multinacional hicieron y deshicieron en YPF contó, hasta último momento, con el asentimiento de los representantes oficiales. El gobierno es, en consecuencia, el principal responsable de la presente crisis energética y de la situación en que ha quedado la que fuera, en otra época, la petrolera estatal.

Estatización fuera de discusión

Sin embargo, la progresividad de la medida adoptada es independiente de las circunstan-



cias que la rodean. Sólo las fracciones más antinacionales de la UCR, del peronismo federal, de la Coalición Cívica y, por supuesto, de todo el macrismo, además del Grupo Clarín y *La Nación*, se alinearon contra la expropiación, clamando a voz en cuello por la seguridad jurídica vulnerada y, en definitiva, haciendo causa común con Repsol.

La iniciativa del gobierno es parcial, y lo seguirá siendo en tanto se mantenga intacto el régimen jurídico que en los años noventa abrió el camino a la privatización de YPF y a la desregulación del sector, otorgando a los concesionarios todo tipo de privilegios y el dominio sobre el eslabonamiento que va de la exploración, explotación y refinación hasta la comercialización de los hidrocarburos. Hay que tener presente que con la estatización parcial el Estado recupera el control sobre un tercio de la producción del petróleo y poco más de 20% del gas. El resto —el grueso de

la explotación— sigue bajo el control de las multinacionales y de algunas corporaciones locales. Esa iniciativa es, asimismo, parcial porque el proyecto de ley no transforma YPF en una empresa estatal, sino que la mantiene en su condición de sociedad anónima, con fuerte presencia de capital privado, vale decir, una sociedad mixta, sometida a una lógica de rentabilidad que está en contradicción con las exigencias de un proceso de acumulación autónomo de capital en escala nacional.

Pero con esta iniciativa, el kirchnerismo puso de su lado a la mayor parte del país y dejó en claro la presencia de un balance de fuerzas que encierra posibilidades más allá del limitado horizonte que se ciñe en torno a la pequeña burguesía progresista. Existe una reserva de fuerzas populares, nacionales y antiimperialistas en condiciones de avanzar sobre los presentes límites que marcan la estatización parcial, y abordar los problemas de una nacionalización progresiva de los distintos eslabones de la producción hidrocarbúfera, junto con la reconversión empresarial de YPF a partir de la intervención de los obreros, empleados y técnicos en su gestión.

No está de más repetir que cualquier avance en esa dirección depende, en gran medida, de la decisión política de los trabajadores y las grandes masas explotadas, cuya experiencia de lucha constituye el cauce profundo de un gran realineamiento nacional-antiimperialista. En definitiva, se trata de retomar lo que dejó pendiente el levantamiento de diciembre de 2001: la construcción independiente de una organización y de una política de masas que quiebre definitivamente los fundamentos del capitalismo semicolonial y abra el curso emancipador. ■

Réquiem para una oposición colonial

La decisión de expropiar el paquete accionario de Repsol en YPF colocó nuevamente al kirchnerismo en la iniciativa política y obligó al grueso de la oposición a aceptar el giro de los acontecimientos.

La desazón del establishment semicolonial se hizo patente de inmediato a través sus voces más autorizadas. En *La Nación*, Morales Solá escribió que el país acababa de entrar en la peor crisis internacional desde la guerra de las Malvinas, denunció que el gobierno había violado la Constitución por no haber seguido los pasos exigidos para la expropiación a la que llamó confiscación, aseguró que los españoles habían sido "desplumados", y pronosticó que la decisión del gobierno había sacrificado la confianza y la inversión por muchos años. Los abogados de Repsol no habrían podido argumentar mejor que el periodista de *Clarín* en favor de sus patrones.

Sin embargo, la prédica del periodismo domesticado encontró eco en una minoría de las fracciones políticas de oposición; en personajes como Aguad, expresión del liberalismo oligárquico en las filas del radicalismo; en Terragno, quién proclamó que así como había que estar contra la guerra de las Malvinas y la convertibilidad había que estar contra la expropiación de Repsol; en Carrió y en De Narváez y en alguno que otro personaje insignificante de la vieja partidocracia. Desde ya, el macrismo en bloque cerró filas en defensa de los intereses del capital multinacional, confirmando su unidad de hierro en torno al programa de colonización imperialista.

La Nación no pudo menos que confirmar la derrota. Su escriba de los domingos expresó sin matices decepción por la "defección" del radicalismo. Señaló que su dirigencia ni "siquiera se detuvo en las formas y en el por qué apoyar

la expropiación"; malvendió la defensa de la Constitución y de la legalidad, que eran su principal capital político. La conclusión no resultó menos patética: "Macri es el único político opositor que apostó claramente a ser en el futuro una opción electoral al eventual fracaso de los políticos kirchneristas". Triste consuelo el del viejo paquidermo oligárquico.

El discurso de los grandes formadores de la "opinión pública", así como el de sus políticos afines, ha quedado congelado en el tiempo. Para ellos la crisis del 2001 ha sido un episodio pasajero y creen que todo ha vuelto a ser como antes. Son absolutamente incapaces de reconocer los cambios que se han producido en el balance del poder social y su repercusión sobre la correlación de fuerzas políticas. Forman parte de un pasado al que hace rato le ha sonado la hora final. ■

Si considerás que las estructuras político-económicas instauradas por el proceso cívico-militar iniciado en 1976 siguen vigentes gracias a la partidocracia; que es necesario construir un nuevo Frente Nacional Revolucionario, con base en la clase trabajadora y los sectores patrióticos; si rechazás los socialismos importados y creés que cada país construye su propio camino hacia la liberación, sobre la base de sus propias tradiciones históricas,

sumate a SOCIALISMO LATINOAMERICANO
www.izquierdanacional.org
contacto@izquierdanacional.org

¡Ya están entre nosotros!

Por MATÍAS DÍEZ

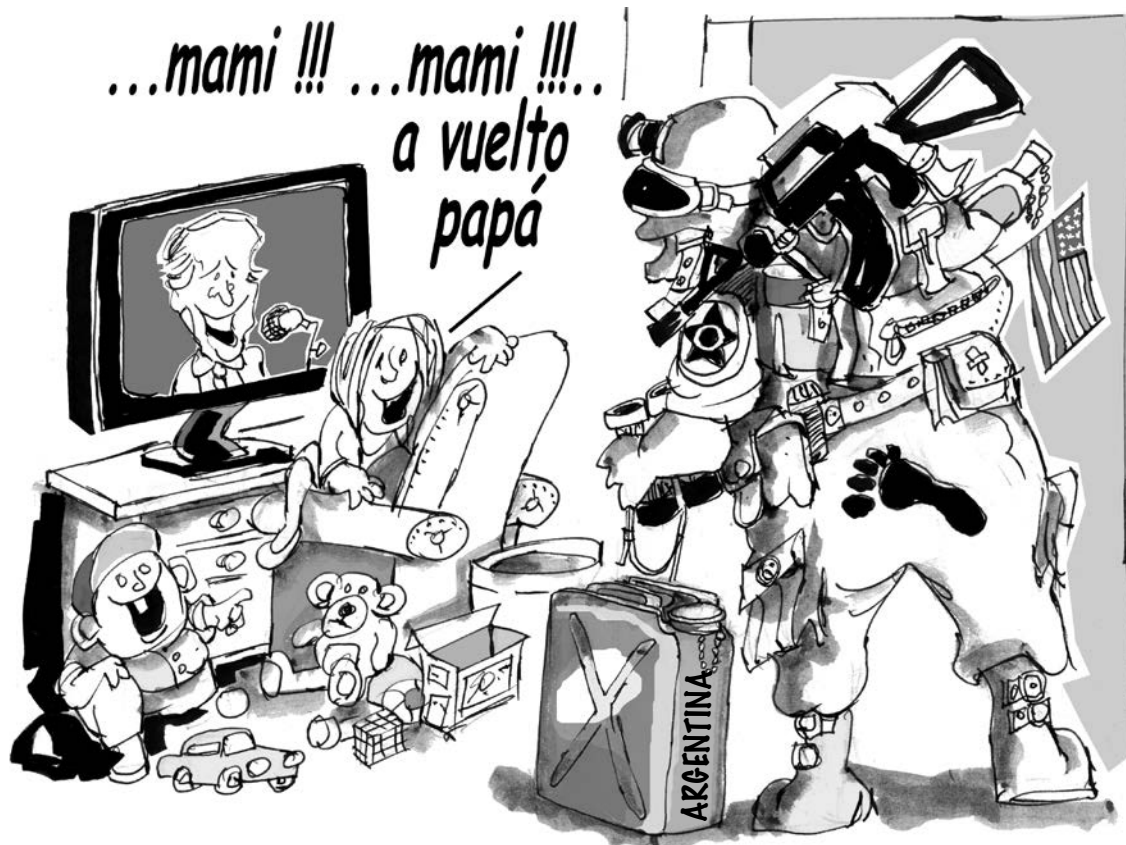
La instalación del Centro de Emergencia y Ayuda Humanitaria en la provincia del Chaco con la asistencia del Comando Sur de las fuerzas armadas yanquis devela la existencia de más continuidades que rupturas en la política exterior de Cristina Fernández.

Capitanich ha cuestionado las críticas y minimizado la significación de la donación de dinero por parte de la embajada norteamericana. Ha sostenido que este centro de emergencias se construyó para dar respuesta a la necesidad de contar con un sistema de asistencia humanitaria. Dicho argumento carece de solidez; nuestro país cuenta con organismos especializados (un consejo federal especializado) y un sistema en escala Mercosur como es la Reunión Especializada de Reducción de Riesgos de Desastres Socionaturales, la Defensa Civil, la Protección y la Asistencia Humanitaria (integrada en representación de nuestro país por la Dirección Nacional de Protección Civil y la Comisión de Cascos Blancos).

Por otro lado, ¿por qué es un organismo militar, como el Comando Sur, el que presta asistencia en desastres? No es la función del Comando Sur, al menos no la verdadera, apoyar a la población que sufre desastres humanitarios. Detrás de la política humanitaria encontramos la cabecera de playa para el desembarco futuro de una base más avanzada, como lo hicieron en Colombia, Ecuador o Aruba y Curazao. Luego vendrá, quizás, un centro de asistencia en la lucha contra el narcotráfico. Todas formas de “cooperación” que evitan el trámite parlamentario de ingreso de tropas extranjeras. Estos centros también permiten que nuestras tropas fraternicen con miembros de las fuerzas imperialistas, a modo de establecer lazos de confianza. Además, su posible participación en programas de asistencia humanitaria sirve de propaganda para hacer más amigables entre la población local a las tropas del imperio.

Esta política revela la continuidad de la subordinación de nuestro país a los intereses anglo-norteamericanos, como el oprobioso desarme argentino producto de la política de desarmamentización impuesta por el imperialismo, a instancia de sus servidores locales de la partidocracia democolonial. Detrás de las declaraciones nacional-populares, el actual gobierno ha mantenido una estrecha colaboración con Estados Unidos; la instalación de la base en Chaco se realizó a instancias de la ministra Nilda Garre, cuando estaba a cargo del Ministerio de Defensa, en encuentro con la embajadora norteamericana Vilma Martínez. También participó Aníbal Fernández, cuando era ministro, impulsando en 2006 el Programa de Fortalecimiento del Sistema Provincial de Emergencias. En diciembre de 2011, el gobernador Capitanich recibió a Edwin Passmore, representante del Comando Sur, quien fuera echado de Venezuela por actividades de espionaje. En aquella oportunidad

Socialismo Latinoamericano repudia la presencia del Comando Sur en territorio argentino y llama a todas las fuerzas nacionales, populares y antiimperialistas a unirse en una campaña para exigir su salida inmediata.



el gobernador, uno de los favoritos para la vicepresidencia de Cristina Fernández, declaró: “Defiendo una alianza estratégica y estoy dispuesto a luchar por esa idea.” Participaron en el encuentro, además, legisladores norteamericanos, quienes fueron recibidos con comentarios muy elogiosos.

Se trata de una seria lesión a la soberanía nacional y una amenaza potencial para nuestra defensa nacional; pero que se corresponde con la participación de nuestro país en las empresas imperialistas norteamericanas como la Minustah, otro ejemplo de “asistencia humanitaria”

¡Nuestro país debe abandonar la política de participación en las empresas imperialistas! No habrá posibilidad de ejercer

ningún tipo de soberanía sobre nuestros recursos energéticos y naturales mientras persista este tipo de subordinación. ¿Cómo expropiar sin indemnización a quienes saquearon nuestro petróleo si nuestro país tiene 57 tratados bilaterales de inversión?

¡Estamos recibiendo asistencia para tareas humanitarias del país que fue incapaz de responder a la tragedia provocada por el huracán Katrina!

Socialismo Latinoamericano repudia la presencia del Comando Sur en territorio argentino y llama a todas las fuerzas nacionales, populares y antiimperialistas a unirse en una campaña para exigir su salida inmediata

Acto del gobierno en Vélez. ¿Y la clase obrera?

Si el kirchnerismo aspira a completar lo que apenas ha iniciado con la estatización parcial del negocio petrolero o con medidas asistencialistas como la “asignación universal por hijo”, deberá tener presente que no se puede luchar contra el imperialismo sin contar con la participación y la movilización activa de la clase obrera y de los sectores más plebeyos de la sociedad.

Si observamos nuestra historia, advertimos que los “movimientos nacionalistas” o frentes nacionales, como les llamamos en Socialismo Latinoamericano (donde no entra, naturalmente, esa “unión democrática” que fue el alfonsinismo), se construyen sobre la base de clases y sectores sociales que, en la arena política, son “interpretados” por diferentes organizaciones. Este punto es de gran importancia. Por no considerarlo, los nacionalistas católicos terminaron sirviendo proyectos opuestos a sus propósitos, por ejemplo, apoyando a Videla en 1976 para que destruyera el tejido nacional-popular que podía oponer resistencia a la política depredadora de Martínez de Hoz.

El yrigoyenismo, primera expresión de frente nacional en el siglo XX, se construyó sobre la base de la pequeña burguesía urbana y rural, y de sectores incipientes del proletariado. El peronismo, por su parte, se conformó sobre la base de una alianza entre una clase obrera estatizada por el nacionalismo burgués y unas fuerzas armadas que fun-

gían como burguesía industrialista, es decir: tanto el yrigoyenismo como el peronismo se nutrían de lo que en sus épocas respectivas era el “bloque de clases subalternas”.

Ahora bien, ¿cuáles son las bases sociales sobre las que se edifica este “cuarto movimiento nacionalista” que para algunos resulta ser el kirchnerismo (quizá pronto cristinismo)? Según reportes de algunos asistentes, en Vélez no hubo obreros metalúrgicos, ni trabajadores estatales, ni comisiones internas de fábricas, ni ferroviarios, ni camioneros, etc. Tampoco hubo centros de estudiantes, trabajadores de prensa, peones rurales, docentes y demás. Hubo, en cambio, agrupaciones que operan al interior del kirchnerismo, que prosperan al calor del aparato estatal y que carecen de autonomía política.

Alguien podrá decir: “sí hubo trabajadores en Vélez” (obviamente, la inmensa mayoría de la gente es trabajadora), en consecuencia, mayoría de trabajadores tiene que haber en las manifestaciones kirchneristas, así como en las antikirchneristas; en

las que convoca la Iglesia para agradecer a San Cayetano y en los festejos por un campeonato de Boca. Pero desde la perspectiva de Socialismo Latinoamericano, representante de la izquierda nacional, no es esto lo que importa. Lo que importa es averiguar si la clase obrera, en tanto clase social y no en tanto suma de individuos interpelados como “ciudadanos”, estuvo presente. Y, en tal caso, también es importante averiguar si la presencia de la clase obrera adquiere un carácter autónomo o heterónomo.

Hubo en el acto de Cristina Fernández en Vélez, en definitiva, organizaciones que no representan un sujeto social en condiciones de poder llevar adelante una lucha antiimperialista y emancipadora. Si la composición de los asistentes fue la que se observó en televisión y reportaron algunos asistentes, entonces hay que concluir que dicho acto no surgió “desde abajo” para dar un apoyo a una perspectiva de poder, sino que fue una movilización instrumentada desde el poder mismo. Pero lo más significativo no fue esto, sino la ausencia del movimiento

obrero organizado. Es decir, la ausencia de una clase social sin la cual sólo puede avanzarse muy limitadamente en la disputa con el imperialismo.

Esto puede decirse incluso desde la “observación pura” y no desde una *a priori* teórico: la dictadura procesista, por ejemplo, quiso enfrentar al imperialismo anglo-yanqui sin contar con el apoyo social del movimiento obrero, y así le fue. Si el alfonsinismo quiso tal cosa (lo cual es dudoso), tampoco le fue posible hacerlo: su base social era la clase media de las grandes ciudades portuarias, como lo fue la base social de los sectores de “izquierda” que en 1955 participaron en el derrocamiento de Perón.

No se puede luchar contra el imperialismo sin contar con la participación y la movilización activa de la clase obrera y de los sectores más plebeyos de la sociedad. Si el kirchnerismo aspira a completar lo que apenas ha iniciado con la estatización parcial del negocio petrolero o con medidas asistencialistas como la “asignación universal por hijo”, deberá tener esto presente

Expropiar la totalidad del sector petrolero

Por GUILLERMO HAMLIN

La expropiación de 51% de Repsol-YPF y su intervención fueron, tal vez, las más importantes decisiones que haya tomado hasta ahora la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Estas decisiones deben ser apoyadas, considerando que constituyen un paso en la dirección correcta, pero son insuficientes. La declaración de interés público nacional debe conducir a la expropiación total del sector, no sólo 100% de YPF sino también al resto de la industria petrolera.

Hay que modificar la legislación menemista

Para el ejercicio pleno de la soberanía, deberá modificarse el régimen jurídico vigente que, desde la nefasta década menemista hasta nuestros días, perpetúa la ausencia de planificación, control y regulación estatal en el sector.

La gran mayoría del pueblo argentino apoya que YPF vuelva a ser una empresa argentina. Tiene el mismo valor de ícono de la soberanía que las Malvinas. Ante esta realidad, el arco opositor sorprendido no puede menos que acompañar a regañadientes, poniendo peros y lamentos.

YPF debe ser sociedad del Estado

Una de las objeciones más fuertes y reales que se hacen contra esta iniciativa es que el grave problema del incremento de las importaciones energéticas y la caída de la producción no será resuelto sino con grandes inversiones que el estado no está en condiciones de realizar en estos momentos. Es decir, la renta expropiada de YPF no será suficiente para ello y se especula con la inversión de empresas extranjeras, cosa que el régimen jurídico de propiedad actual de la empresa permite.

No pagar la ilegítima y fraudulenta deuda externa

Ante esta realidad, el gobierno se enfrenta al siguiente dilema: o recurre a las inversiones de empresas extranjeras, lo cual sería cambiar de collar pero seguir siendo perro (como decía Jauretche), o recurre para las inversiones necesarias a los fondos provenientes del no pago de la deuda externa ilegítima y fraudulenta, probada como tal en sede judicial.

No importar capitales e impedir que los generados en el país se vayan

Ante la decisión del gobierno argentino, nuestro país recibió muestras de solidaridad latinoamericanas, así como advertencias y amenazas de los países imperialistas. “No habrá más crédito para Argentina”, “no se conseguirán inversores”, etc. Ésta es una buena oportunidad para demostrar que no son necesarios los capitales extranjeros; hay que hacer todo lo contrario: evitar que los capitales generados en el país salgan.

Para prepararse contra las previsibles represalias, el gobierno deberá tomar medidas como denunciar los lesivos tratados bilaterales, que dan seguridad jurídica a las inversiones extranjeras, lo cual está técnica y legalmente en condiciones de hacer, y ganar así seguridad jurídica para los ciudadanos argentinos y para el futuro desarrollo del sector energético. A su vez deberá tomar la misma decisión soberana de renunciar al CIADI, que tomaron Venezuela, Bolivia y Ecuador.

Auditoría integral

Se deberá encarar una auditoría integral (legal, impositiva, técnica, contable, económi-

Para asegurar el logro de objetivos soberanos imprescindibles, deberá confiarse a los trabajadores y técnicos de YPF la gestión de la empresa y su control estará, como corresponde, bajo los organismos estatales correspondientes como la AGN y el SIGEN.

ca y financiera) sobre todos los campos en que opera Repsol-YPF y sobre el resto de los operadores privados, y verificar las reservas comprobadas de hidrocarburos que conforman los activos estratégicos de toda empresa petrolera. Esta auditoría deberá, por supuesto, considerar los pasivos acumulados

bajo la gestión Repsol-Eskenazi, así como los posibles pasivos ambientales, para permitir la determinación del patrimonio neto de la empresa, y así obtener el precio real de la compañía, distinguiendo el valor de libros de la empresa del de mercado, fruto de la especulación bursátil. Por supuesto que si de

esta auditoría integral surgiera en forma fehaciente que el patrimonio de la empresa ha sido afectado por la gestión de Repsol-YPF, el Estado argentino podrá rechazar cualquier pago indemnizatorio por lo expropiado.

Al ser YPF sociedad del Estado, se cerraría la puerta a cualquier posibilidad de entrada de empresa extranjera alguna y, además, se lograrían los objetivos de soberanía energética para industrializar el país, expresados en términos de planificación, regulación e intervención en la cadena de producción, distribución y consumo, buscando el logro del autoabastecimiento y la recuperación para el Estado de la renta petrolera. Para asegurar el logro de estos objetivos, deberá confiarse a los trabajadores y técnicos de YPF la gestión de la empresa, y su control estará, como corresponde, bajo los organismos estatales correspondientes como la AGN y el SIGEN ■

Malvinas e YPF: apariencias que engañan

Lejos de ser una medida “revolucionaria”, como algunos defensores apuntan, o que “aleja a la Argentina del mundo”, como señalan sus detractores, se trata de una medida en la dirección correcta, pero parcial, improvisada y plagada de incongruencias.

Por DANIEL N. MOSER

La expropiación parcial del capital accionario de YPF y la reclamación de la soberanía sobre las islas Malvinas tienen muchos puntos en común. Ambas medidas de gobierno resultan incuestionables para la enorme mayoría de los argentinos. Tanto una como la otra son resultado de la improvisación, por estar inspiradas más en la búsqueda de efectos propagandísticos que en una estrategia y una planificación propias de una política de Estado. También, en los dos casos se manifiestan las incongruencias del gobierno de Cristina Fernández.

El reclamo de la soberanía argentina sobre las islas Malvinas es histórico. A partir de la transitoria recuperación durante 1982, no ha habido gobierno argentino—incluso a su pesar—que no haya reclamado su recuperación. Se trata de un hecho cuya enorme trascendencia no ha podido ocultarse tras una abrumadora campaña “desmalvinizadora”, motivada en su profundo significado emocional, histórico y, fundamentalmente, político. Trascendencia y significado que en www.izquierdanacional.org han sido abordados ampliamente en diversos artículos.

La única diferencia sustantiva que distingue la acción de los gobiernos anteriores de los de Néstor Kirchner y Cristina Fernández es, paradójicamente, la forma. Para ambos presidentes, las Malvinas formaron parte de su discurso propagandístico. Debe reconocerse que se han tomado medidas diplomáticas con mayor ímpetu, pero en los hechos tales acciones han sido insustanciales para los fines planteados. Y digo planteados y no propuestos pues, al mismo tiempo que se reclama el fin del colonialismo británico en las tribunas, se obtienen medidas solidarias de países latinoamericanos y se amenaza con medidas legales a empresas extranjeras que exploran yacimientos de petróleo en el mar de Malvinas, se permite que empresas multinacionales británicas participen del negocio petrolero en territorio argentino—British Petroleum (BP) posee 60% de Pan American Energy (PAE), la segunda productora de hidrocarburos de Argentina—, negocien la ilegítima y fraudulenta deuda externa argentina—Amado Boudou designó, por la Resolución 267/09, como “coordinador global” del canje al banco inglés Barclays—, actúen en el sistema financiero nacional y exploten recursos naturales estratégicos, en la minería por ejemplo—véanse detalles de todos estos casos en www.izquierdanacional.org—.

En el caso de YPF sucede algo muy similar: existe un gran despliegue propagandístico además de abundante improvisación e incongruencia.

Vista en perspectiva y objetivamente, la decisión del gobierno argentino no tiene nada de sorprendente ni de inusual. Los datos duros son reveladores: de 2003 a 2011, la importación de energéticos aumentó 1.600%, al pasar de 538 a 9.397 millones de dólares. Por primera vez en los últimos 17 años, Argentina se transformó en un importador neto de gas y petróleo. Entre 2001 y 2010, las reservas probadas de gas cayeron 53%, lo que equivale a casi ocho años de producción, y las de petróleo disminuyeron 12%. La producción de petróleo ha ido en picada desde 1998 y la de gas está cayendo desde 2004. Estos datos, además de revelar una enorme pérdida de riqueza para nuestro país, implican un riesgo latente de hacer inviable el desarrollo económico argentino. En términos de soberanía, tal dependencia energética es gravísima.

Sin embargo, paradójicamente, a la empresa YPF-Repsol no le iba nada mal: de 1999 a 2011, sus utilidades fueron de 16.450 millones de dólares, de los cuales se distribuyeron dividendos por 13.246 millones de dólares entre sus accionistas. Se entiende así que los hasta hace poco propietarios mayoritarios españoles hayan puesto el grito en el cielo, con el respaldo de su gobierno. La empresa daba un servicio cuestionable, pero obtenía grandes dividendos.

Pero ¿fue responsabilidad exclusiva de la iniciativa privada la obtención de dichos resultados o el gobierno argentino compartía esa responsabilidad? La respuesta puede hallarse al atender algunos datos: el primero es que, siendo diputada, la actual presidenta argentina fue promotora de la privatización de YPF que impulsó Carlos Menem, de cuyo gobierno el actual se considera la antítesis—y, a pesar de esto, como senador Menem ha votado en los temas claves junto al gobierno que lo estigmatizó; curioso, ¿no?

El segundo dato: la importación de energéticos por la baja producción nacional no se dio de la noche a la mañana. En números redondos, se importaron 550 millones de dólares en 2003; 1.000 millones en 2004; 1.550 millones en 2005; 1.700 millones en 2006; 2.800 en 2007; 4.300 en 2008; 2.600 en 2009; 4.500 en 2010, y 9.400 millones de dólares en 2011.

Un tercer dato: este proceso se desarrolló durante el período de gobierno de Néstor Kirchner y de su esposa, la actual presidenta. Obviamente, ambos gobiernos tenían injerencia y autoridad para supervisar y, en su caso, encauzar oportunamente el rumbo... pero vieron, aprobaron y callaron.

Lejos de ser una medida “revolucionaria”, como algunos defensores apuntan, o que “aleja a la Argentina del mundo”, como señalan sus detractores, se trata de una medida en la dirección correcta, pero parcial, improvisada y plagada de incongruencias ■

Videla y la ingratitud de sus cómplices

LAS DECLARACIONES DEL EX DICTADOR EN EL LIBRO DE CEFERINO REATO

Por GUSTAVO CANGIANO

Triste destino el del ex dictador Videla y sus centuriones de los Falcon verdes. En el “éxito de su misión histórica” está la razón misma del oprobio que hoy los envuelve. Asaltaron el poder el 24 de marzo de 1976 con el propósito de imponer el “orden” y acabar con una sociedad “anarquizada”. Engalanaron su tarea presentándola como una cruzada contra la “subversión marxista”. Tuvieron éxito. En sólo dos años de feroz represión, ya habían liquidado al “enemigo subversivo”, entendido éste tanto en su acepción estrecha, que lo limitaba a la guerrilla urbana y rural del ERP y Montoneros, como en su acepción más amplia, que abarcaba todo el entretejido de organizaciones populares maduras en las dos décadas anteriores.

A comienzos de 1973, el sueño de “construir el Hospital de Niños en el Sheraton Hotel” parecía una realidad palpable. Tres años más tarde, gracias a Videla y sus centuriones, ese sueño estaba muerto. ¡Podían respirar tranquilos los dueños del Sheraton Hotel, que ya habían abortado sueños semejantes en Chile, Bolivia, Uruguay y Perú! Los Pinochet, los Banzer, los Bordaberry y los Morales Bermúdez fueron los enterradores de sueños en los países hermanos; Videla lo fue en el nuestro. En términos menos románticos, lo que estos personajes hicieron fue cumplir con el objetivo encomendado en los cuarteles del Pentágono y en las oficinas de la Casa Blanca, donde mandaban los Rockefeller y los Kissinger: había que aplastar con el fuego de la contrarrevolución la osadía de los pueblos que luchaban por la emancipación nacional y social. Y Videla lo hizo con gran eficiencia. ¿Por qué, entonces, los beneficiarios del “orden” que él contribuyó a edificar no sólo no le rinden homenaje, sino que incluso hasta lo repudian?

Miles de argentinos debían morir para que triunfara el “proceso”

Refiriéndose a las declaraciones de Videla transcritas en el libro *Disposición Final*, del periodista Ceferino Reato, el editorial del diario *La Nación* del pasado 29 de abril, titulado “La confesión de Videla”, resulta revelador sobre cuál es la estrategia discursiva actual de los intereses oligárquico-imperialistas que recurrieron a Videla en 1976.

La Nación pretende escandalizarse ante la siguiente declaración del ex dictador: “Eran siete u ocho mil las personas que debían morir para ganar la guerra contra la subversión. Era el precio a pagar para ganar la guerra y necesitábamos que la sociedad no se diera cuenta”. La verdad es que Videla tiene razón: miles de personas debían morir en Argentina de 1976 si se quería “ganar la guerra contra la subversión”. Pero, ¿qué significaba “ganar la guerra contra la subversión”? Significaba aplastar a sangre y fuego el movimiento popular que desde 1955 enfrentaba la violación de la soberanía, que desde 1969 había abierto un horizonte de radicalización política en la perspectiva de un gobierno obrero y popular, y que en 1973 había apoyado la continuidad del ciclo nacional-popular interrumpido 18 años antes. Significaba, en suma, responder a las fuerzas revolucionarias que cuestionaban la condición semicolonial del país con el peso mortífero de una contra-



Está claro. Una contrarrevolución oligárquico-imperialista como la de 1976 tiene permiso de las clases dominantes para matar a quienes haga falta matar. Pero esto no significa que sus agentes puedan alardear del trabajo sucio.

rrrevolución asentada en los intereses conservadores de las clases dominantes.

En el libro de Reato, Videla no sólo nos recuerda que una contrarrevolución, siendo uno de los polos que tironean a la sociedad en momentos de guerra civil, no puede andarse con chiquitas, porque en la lucha entre la revolución y la contrarrevolución están implicados todos los sectores sociales y su desenlace determinará quiénes viven y quiénes mueren. Videla nos recuerda, también, algo que *La Nación* quisiera olvidar: que sus centuriones no actuaron por iniciativa propia, sino que detrás de ellos estaban los empresarios, los medios de prensa,

los políticos partidocráticos, los hombres de la cultura y, detrás de ellos todavía, alentaban a los centuriones los “poderes fácticos” que gobiernan el capitalismo transnacionalizado.

Herederos de Videla se hacen derecho-humanistas

El editorial de *La Nación* es tan hipócrita como Graciela Fernández Meijide, quien entrevistada por Joaquín Morales Solá (el 30 de abril en TN) sostuvo que la represión procesista no sirvió de nada porque “el comunismo, en la URSS, caería por sus propias contradicciones internas”. Según parece, la ex frepamista ignora que el objetivo de Videla no era derrotar al “comunismo” en la URSS sino en Argentina, y que lo hizo con tanta precisión que todavía hoy sufrimos los efectos de esa derrota.

Veamos lo que dice *La Nación*: “En los 90, las fuerzas armadas produjeron significativas declaraciones de autocritica, asumiendo la responsabilidad por los excesos y abusos cometidos [...] También la Iglesia formuló su autocritica por no haber hecho más de lo que hizo para evitar que el país retrocediera en la década del 70 hacia formas de violencia estremecedoras”.

Pasemos por alto el hecho de que “criticar” el abuso de violencia contrarrevolucionaria por parte de las fuerzas armadas no significa criticar el uso mismo de esa violencia, y que autocriticarse por “no haber hecho más de los que se hizo” implica reconocer que algo se hizo, lo cual es más que dudoso en el caso de la iglesia católica. Aun pasando por alto estas trampas discursivas del editorialista, no aparece por ningún lado la crítica concreta de *La Nación* a Videla. O mejor dicho, sí aparece: le critica no que haya hecho lo que hizo, sino que diga que lo hizo. “Desde esta columna editorial —dice— hemos abogado [...] por la necesidad de avanzar hacia la reconciliación nacional a partir de [...] una memoria integral [...] Y tanto la actitud de Videla como la de los cabecillas de las agrupaciones terroristas [...] constituyen una traba real [...] Ni el rencor ni la memoria parcial permiten cicatrizar heridas [...] Y en la defensa de los derechos humanos deberían estar alcanzados tanto quienes murieron o desaparecieron a manos del terrorismo de Estado como las muchas víctimas del accionar guerrillero.”

Está claro. Una contrarrevolución oligárquico-imperialista como la de 1976 tiene permiso de las clases dominantes para matar a quienes haga falta matar. Pero esto no significa que sus agentes puedan alardear del trabajo sucio. ¿Cuántas familias aristocráticas no se desacreditarían si salieran a luz las miserias que se encuentran ocultas en el origen de sus linajes? Lo mismo pasa con esta democracia colonial parida por la picana de Videla y sus centuriones. La “defensa de los derechos humanos” no es más que el cuento con el que los vencedores de 1976 quieren que olvidemos lo que nos hicieron. Pero no olvidaremos. Y no olvidar significa oponer a la contrarrevolución de los poderosos, no el opio derecho-humanista, sino la revolución emancipadora de las mayorías oprimidas. ■

TALLER ENERGÍA

¿HACÍA DONDE VA YPF?

Petróleo: pasado, presente y futuro

Coordinador: **Gustavo Lahoud**

2 y 9 de junio

Socialismo Latinoamericano Izquierda Nacional

www.izquierdanacional.org

Maza 34, Capital Federal, a metros de la estación del subte Loria - línea A

SL SOCIALISMO LATINOAMERICANO

IZQUIERDA NACIONAL

Director: Osvaldo Calello